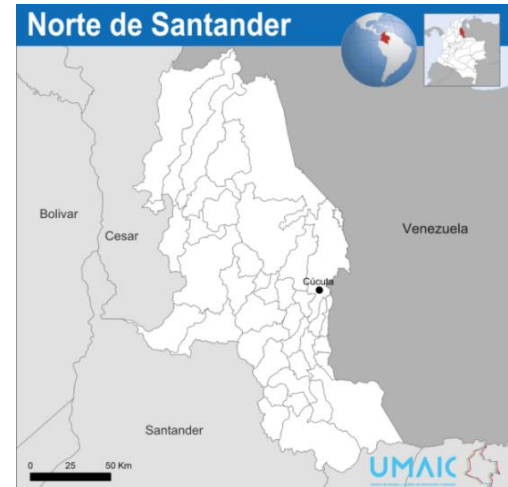


NORTE DE SANTANDER | Octubre 2017

DATOS DEPARTAMENTALES		
Gobernador		William Villamizar Laguado
Datos Demográficos ¹	Población	1.379.533 I 78,21% Cabecera; 21,13 % Rural II 49,5% Hombres; 50,5% Mujeres (2017) III 1,61% Negro (a), Mulato, Afrocolombiano; 0,61% Indígena; sin pertenencia étnica 85,30% (2005) IV
	Población desplazada	PDI individuales: 248.836 (1985-2017); 124.539 mujeres; 122.671 Hombres; 55 LGBTI i PDI masivos: 10.914 (2009-2017); 1.171 (2017); 1013 hombres; 953 Mujeres (2016) ii
Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios ²	Víctimas de Minas	Civil: 233 (1990-2017); 0 (2016); 3 (2017) Fuerza Pública: 572 (1990-2017); 5 (2016); 0 (2017) 3 hombres; 0 Mujeres (2017) iii
	Acceso y Confinamiento	50 eventos (2013-2015); 38 (2016); 7 (2017) iv
	Desastres Naturales	335 eventos (2012-2015); 127 (2016-2017); 43.480 víctimas (2012-2017) 29.876 (2015); 5.738 (2016); 4 (2017) v
	Homicidios	3940 (2008-2014); 338 (2015); 496(2016) 160(2017) 457 hombres 39 Mujeres (2016) vi
	Amenazas	203 eventos (2008-2015); 55 (2016); 36 (2017) vii
	Ataques contra la población civil	612 eventos (2008-2017); 43 (2015); 102 (2016); 130 (2017) viii
	Acciones Bélicas	747 (2008-2017); 59 (2015); 92 (2016); 16 (2017) ix
	Incidencia de la pobreza por ingresos	39,9% (2014), 40% (2015) x
	Cobertura bruta en educación media	70,64% (2013), 72% (2014) xi
	Mortalidad Infantil Ajustada (menores 1 año)	12,8 (2013), 12,75 (2014) por cada 1.000 nacidos vivos xii
Desempleo	12,5% (2015); 16,6% (2016) 18,3% (2017) 15,5% Hombres, 20,7% Mujeres xiii	



El departamento de Norte de Santander, con capital en Cúcuta, está ubicado en la zona nororiental de Colombia en la frontera con Venezuela. Limita al norte y al oriente con Venezuela, al sur con los departamentos de Boyacá y Santander y, al occidente, con Santander y Cesar. Tiene una extensión de 22.130 kilómetros cuadrados, distribuidos en 40 municipios.

MENSAJES CLAVE

- Son destacables los altos índices de vulnerabilidad, pobreza, desempleo, baja escolaridad y precaria atención en salud. El impacto en la reducción de la capacidad productiva de tierras cultivables, por la actividad de la industria extractiva tiene relación con la crisis de la frontera. La falta de oportunidades laborales dignas y la explotación de recursos naturales, sin atender a los derechos de consulta previa libre e informada de la población indígena, son factores de preocupación. (Ver Contexto de Desarrollo Sostenible, pg. 4).
- La construcción de paz se consolidará si se avanza en el cumplimiento de las obligaciones de respetar, garantizar y promover los DDHH de la población, disminuir la desigualdad y cerrar las brechas sectoriales y territoriales. La débil presencia institucional, y el uso y tenencia de la tierra, así como el incremento de cultivos ilícitos y las rutas estratégicas del narcotráfico son las mayores dificultades para la implementación de los acuerdos de paz con las FARC-EP. (Ver Contexto en Construcción de Paz, pg. 2).
- La Región del Catatumbo y municipios fronterizos padecen afectaciones humanitarias por la reconfiguración territorial del EPL, de los Grupos Armados Post-desmovilización (GAPD) —especialmente el Clan del Golfo y Los Rastrojos— y del ELN (que se encuentra en cese al fuego desde el 1 de octubre, por lo cual se espera reducción de sus acciones). Su accionar tuvo consecuencias como desplazamientos masivos, homicidios selectivos, secuestros, amenazas a contratistas, personal médico, líderes y lideresas sociales, profesores, funcionarios públicos, población LGBTI, ciudadanos venezolanos, entre otros. Persisten las acciones contra infraestructura petrolera con impactos medioambientales. Por otra parte, los ciudadanos/as venezolanos/as enfrentan dificultades para regularizar su situación en Colombia que conllevan riesgos de protección y explotación, en particular, de mujeres y niñas frente a la explotación sexual. (Ver Contexto Humanitario, pg. 6).

¹ Datos Demográficos I-III) DANE Censo 2005, proyección 2017; IV) DANE Censo 2005

² Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios: i) UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Registro Único de Víctimas (RUV), desplazamientos individuales. Corte 01 septiembre de 2017; ii) OCHA, desplazamientos masivos. Corte 01 enero de 2013 a 01 octubre de 2017; iii) DAICMA - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Víctimas por MAP/MUSE. Corte 1990-31 agosto 2017; iv) Monitoreo OCHA. Corte 01 enero de 2013 a 01 octubre de 2017; v) UNGRD –Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Corte 28 febrero 2017; vi) Instituto Nacional de Medicina legal Corte 1 de enero de 2008 a 31 Agosto de 2017) vii;viii;ix) MONITOR. Corte 01 enero de 2008 a 01 de octubre de 2017; x) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE xi) PNUD con base en Ministerio de Educación Nacional xii) DANE xiii) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE

1. CONTEXTO Y RETOS EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ

MENSAJES CLAVE

- Norte de Santander refleja una serie de conflictos sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales, relativos a su ubicación geoestratégica y la débil presencia del Estado. Además, la reconfiguración del control territorial de los grupos armados no estatales (ELN, EPL y Grupos Armados Post-desmovilización, GAPD)³, incluyendo el control sobre la producción de cultivos ilícitos, su procesamiento y las rutas de tráfico de narcóticos, armas y contrabando son los principales dinamizadores del conflicto armado.
- El acceso, uso y distribución de la tierra, incluyendo la contradicción entre los diversos modelos de desarrollo, es una de las conflictividades centrales. Esta contradicción ha suscitado diversas acciones de las diferentes agrupaciones campesinas de la región y movilización por la defensa del territorio por parte de los pueblos indígenas Motilón Barí y Uwa. Se mantienen procesos de resistencia a la extracción de recursos naturales, en contraste, con la falta de medios de vida sostenible para las comunidades.
- Los cultivos ilícitos han arrasado con la cultura campesina tradicional y han causado daños ambientales irreversibles, configurando un escenario de inseguridad alimentaria aguda. La falta de mecanismos efectivos para la participación de las comunidades campesinas e indígenas en la construcción de política pública y en la toma de decisiones de sus territorios empeora esta situación. Los pueblos étnicos del departamento han tenido que acudir a instancias judiciales para hacer respetar su derecho a la consulta previa, libre e informada. Un ejemplo es la decisión de la Corte Constitucional T- 880 de 2006, en respuesta a una tutela interpuesta por el Pueblo Motilón Barí para la protección de su territorio ancestral de la extracción de hidrocarburos iniciada por Ecopetrol.

CONTEXTO Y RETOS EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ

- 1. Conflictos en el territorio.** Están relacionados con el modelo de desarrollo y se asocian a los procesos de privatización; a las limitaciones a la explotación de recursos naturales y monocultivos; a la gradualidad en la sustitución de cultivos ilícitos; a la búsqueda de la justicia social, expresada en acceso a servicios públicos básicos para la población; a las solicitudes territoriales de campesinos y pueblos étnicos, y a la garantía de los derechos humanos de la población, en especial, frente a los líderes de DDHH, líderes políticos y reclamantes de tierra. El control territorial (en relación con cultivos ilícitos y rutas de tráfico de drogas, armas y contrabando) es el principal dinamizador del conflicto entre los grupos armados no estatales y la fuerza pública. Por otra parte, es un reto para el Estado colombiano el cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017 de la Corte Constitucional, en la que se ordenó resolver en el término de un año las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura. Una vez agotada la consulta previa, se debe resolver la solicitud de constitución de la Zona de Reserva Campesina presentada por la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT. Así mismo, se ordenó la creación de una Mesa Consultiva entre la comunidad indígena Motilón Barí y ASCAMCAT, con acompañamiento del Ministerio de Agricultura, la ONIC y ANZORC⁴, en la que se trabajarán medidas de desarrollo alternativo para los territorios que simultáneamente ocupan pueblos indígenas y comunidades campesinas.
- 2. Derechos de las víctimas.** En Norte de Santander 290.005⁵ personas (21% de la población) son víctimas del conflicto armado. La atención a las víctimas⁶ y el acceso a los mecanismos de reparación se han visto obstaculizados por el desconocimiento de algunos funcionarios sobre las rutas de atención y la centralización de las unidades de atención en Cúcuta y Ocaña, pese a la instalación de puntos de atención en Tibú y Villa del Rosario. También, persisten dificultades para la asistencia a través de ayuda humanitaria, que, debido a disponibilidad de recursos, ha disminuido sustancialmente, tanto en el monto como en la regularidad. Pese a que mejora la información disponible sobre la población víctima, el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral, PAARI, ha sido percibido por las víctimas como una barrera para acceder a derechos, dadas las demoras en su realización. Existen 13 sujetos de reparación colectiva en el departamento entre los que se encuentra la comunidad Motilón Barí y el pueblo ROM.
- 3. Movilización social.** Las dinámicas de movilización social están asociadas a la exigibilidad de cumplimiento de los acuerdos de paz, especialmente, en lo relacionado con el punto 1 (Reforma Rural Integral) y el punto 4 (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas). Esto ha intensificado la conflictividad entre las comunidades campesinas y el Gobierno nacional sobre la priorización de la sustitución voluntaria frente a la erradicación forzada, como mecanismo para la reducción de los cultivos ilícitos en la Región del Catatumbo. Otras dinámicas de movilización social, giran en torno a la reivindicación de derechos económicos y sociales. Se destacan las marchas del Magisterio, de comerciantes, por la crisis económica; de organizaciones sociales, por la defensa de los páramos y de estudiantes universitarios, por el derecho a la educación pública. Además, la protesta nacional en los establecimientos penitenciarios, por derechos laborales y contra la crisis carcelaria; los plantones por el reclamo de derechos pensionales de madres comunitarias; las protestas de vendedores informales frente a la política del Gobierno local, en la que se acentúa la tensión entre el espacio público y el derecho al trabajo.

³ ELN: Ejército de Liberación Nacional; EPL: Ejército Popular de Liberación

⁴ ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia; ANZORC: Asociación Nacional de zonas de reserva campesina.

⁵ UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV), desplazamientos individuales. Corte 01 marzo de 2017

⁶ De 1.379.533 habitantes en Norte de Santander según DANE 2005- proyección 2017, 290.005 son víctimas del conflicto armado equivalente a un 21%. Número de víctimas por hecho victimizante registrado por la UARIV (Corte 01 septiembre de 2017): Desplazamiento: 248.836; homicidios: 41.605; desaparición forzada, 4.904; Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos: 2.992; secuestro: 2.314; amenazas: 5.271; minas antipersona: 780; violencia sexual: 842; tortura: 350; reclutamiento forzado 153; pérdida de bienes: 4.716. Del total de víctimas en el departamento, los hombres son los más afectados (146.029); las mujeres son 141.377 y la población LGTBI 65.

4. Capacidad institucional y social. La escasa confiabilidad en las instituciones por la limitada capacidad de respuesta del Estado —especialmente en las zonas rurales la poca divulgación de la información pública—; el limitado acceso a la Justicia y las demoras en los procesos son parte de los problemas estructurales de Norte de Santander. Pese a que el Índice de Transparencia Institucional del departamento para 2016 es de 60.4 (riesgo medio), el Factor de Institucionalidad representa los mayores riesgos de corrupción y, en contraste, el municipio de Cúcuta, registra un riesgo muy alto en 2016, con un índice de transparencia de 43.17. Es importante tener en cuenta que las mayores debilidades se evidencian en la gestión de la planeación (44.4), el comportamiento ético (51.4), la gestión de talento humano (52.4) y las medidas y estrategias de lucha contra la corrupción (54.1). Finalmente, se observa que el departamento se encuentra por debajo del promedio nacional en términos de desempeño integral institucional, de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación, DNP.

5. Seguridad ciudadana. En el Norte de Santander hace presencia la Brigada XXX del Ejército Nacional con siete batallones, la Brigada Móvil XXIII y la Fuerza de Tarea Vulcano. La cercanía de las bases militares a los cascos urbanos, como en San Calixto, Hacarí y Aserrío (Teorama), ha sido calificada por organizaciones sociales y campesinas como un riesgo para la seguridad de la población. Si bien se ha visto una disminución importante de la violencia armada en el departamento en los últimos años, la tasa de homicidios (38.09) sigue por encima del promedio nacional (23.62). La capital nortesantandereana es la sexta más violenta del país, según el último reporte del Instituto de Medicina Legal (2017). La zona fronteriza y el Catatumbo se destacan con niveles muy superiores al promedio departamental. La situación es preocupante en Tibú (114.42), Teorama (80.63) y Puerto Santander (105.56). Adicionalmente, el 91,5% de las víctimas de homicidio son hombres y preocupa, particularmente, el gran número de niños y adolescentes víctimas de homicidios.

6. Hechos de implementación de paz. La Fundación Paz y Reconciliación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa de Reintegración con Enfoque Comunitario (CORE) han elaborado el documento *“Norte de Santander capacidades locales para la paz, recursos y retos para el posconflicto”*⁸, orientado a determinar las características sociales e institucionales del departamento en el posconflicto. El Ministerio del Interior ha presentado el texto *“Estrategia de seguridad y convivencia para el posconflicto”* para fortalecer instrumentos para que la Policía Nacional pueda combatir con mayor éxito la delincuencia. Los Ministerios del Interior y Posconflicto y la Gobernación han presentado el *“Plan Especial para el Posconflicto”*, para impulsar la productividad y el desarrollo en la región⁹. Norte de Santander es parte de la iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, “Gestores Territoriales”, que serán enlaces regionales de Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA). Se resaltan iniciativas tales como el “Seminario de Justicia Transicional, Paz y Postconflicto para periodistas”, de la Secretaría de Víctimas del departamento; los proyectos de reconstrucción de memoria histórica en Tibú y el Comité de Impulso –Festival de la Vida/FEVIDA– en La Gabarra, con apoyo de la Comisión de Memoria Histórica, la Diócesis de Tibú y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP), de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Departamento de la Prosperidad Social (DPS) ha organizado un grupo especial para la formulación e implementación de estrategias territoriales de paz y reconciliación en el departamento a través de (5) cinco grandes áreas: estado del arte y formulación de estrategias territoriales de paz y reconciliación; estrategia de pedagogía social para la paz; estrategia de comunicaciones y gestión del conocimiento; y observatorios regionales de experiencias de paz y reconciliación.

⁷ Reporte final de resultados. Índice de transparencia municipal 2015- abril 2016. Disponible en: <http://indiceatransparencia.org.co/portals/0/Documentos/2017/Municipios/Ficha%20Resultados%20Alcaldi%CC%81a%20Cu%CC%81cuta.pdf>

⁸ Fundación Ideas para la Paz (2014), Norte de Santander Capacidades Locales para la Paz http://www.ideaspaz.org/especiales/capacidades-locales-para-la-paz/descargas/FIP_CartillasRegiones_06NorteSantander.pdf

⁹ Ibidem

2. CONTEXTO Y RETOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MENSAJES CLAVE

- El departamento presenta altos niveles de vulnerabilidad, pobreza, desempleo, inequidad, y problemas en el acceso y disponibilidad de bienes y servicios básicos de calidad, como educación, vivienda, alimentación, vías, agua potable, saneamiento básico, energía y salud, especialmente, en la Región del Catatumbo. Las desigualdades se muestran en el acceso a derechos entre zonas urbanas y rurales, siendo éstas las zonas más afectadas por el conflicto armado. Mientras que en Colombia la población considerada pobre por ingresos llegó a 27,8% en 2015, en Norte de Santander alcanzó el 40%, lo que representa 12,2 puntos porcentuales arriba del promedio nacional. Las principales causas son el desempleo, la baja productividad, la presencia de actores armados ilegales, la ausencia de políticas públicas para la generación de ingresos y empleabilidad de la población más expuesta a riesgo de vulnerabilidad económica, además de la fuerte exposición a riesgos ambientales, a los que se suma un deficitario sistema de salud.
- Las zonas de protección ambiental son afectadas por la presencia de diversos actores que generan conflictividades por la tenencia y/o uso de la tierra: (i) la industria minera y extractiva acarrea consecuencias ambientales negativas sobre los ecosistemas productores de agua y biodiversos; (ii) la presencia de monocultivo de palma africana y la creciente industria maderera hacen que la frontera de parques y reservas se reduzca y (iii) el narcotráfico encontró en el Catatumbo un territorio apropiado para el fortalecimiento de cultivos ilícitos. El desarrollo de estos cultivos también es generador de conflictos por la desertificación de la tierra y la reducción de zonas agrícolas. La presencia del narcotráfico y los diversos grupos armados no estatales han convertido al Catatumbo en una zona de constante desplazamiento humano y han generado la reducción de territorios indígenas ancestrales.
- En términos de igualdad entre mujeres y hombres, las brechas son amplias —especialmente en zonas rurales afectadas por el conflicto— en donde las mujeres son sujetos de múltiples formas de discriminación, haciéndolas más vulnerables al riesgo de pobreza que los hombres. Sus posibilidades de acceso a alimentos a atención en salud, educación, empleo digno y participación en espacios de decisión, son más reducidas en comparación con los hombres.

CONTEXTO Y RETOS DE DESARROLLO

1. **Pobreza.** El 40% de la población en Norte de Santander, se encuentra en situación de pobreza, mientras que el 11,6% es identificada en situación de pobreza extrema. Es decir, cuatro de cada diez personas viven con menos de \$7.511 al día y, de estas cuatro, hay 1 que sobrevive diariamente con menos de \$3.334. Según las cifras de pobreza departamental, medidas por NBI¹⁰, la pobreza en el departamento tiene una alta incidencia en la zona rural; dado que mientras la pobreza en las zonas urbanas llega a 22,49%, en las zonas rurales casi se triplica, alcanzando un 58,91%. Lo que ubica al departamento en el puesto 17 entre los 32 departamentos colombianos, 5,41 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Los municipios nortesantandereanos que cuentan con las tasas más altas de pobreza están en la Región del Catatumbo: por ejemplo, 79 de cada 100 ciudadanos que residen en el municipio Hacarí, se encuentran en situación de pobreza, por necesidades básicas insatisfechas. Tienen una situación similar los municipios de El Tarra y San Calixto, donde 73 de cada 100 personas viven en condiciones de pobreza.
2. **Mercado Laboral.** En 2015 Norte de Santander presentó la segunda mayor tasa de desempleo del país (12,5%). El área metropolitana de Cúcuta¹¹ tiene la tasa de desempleo más alta con un (17,5%), después de Quibdó. La misma incrementó en más de cuatro puntos porcentuales tras la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela en el año 2015. Según datos del DANE y el Ministerio de Trabajo, el ingreso promedio de los ocupados en el 2015 en Norte de Santander fue de \$ 685.000 pesos, \$ 219.000 menos que el promedio nacional. En la Región del Catatumbo se presenta la mayor tasa de desempleo; según el Sistema de Información de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, SISBEN (2015); el 96% de la población se encuentra en el sistema y de este total el 29% de las personas manifestaron que no desarrollan ningún tipo de actividad. Un análisis de esta variable con perspectiva de género, muestra que el 45% de las mujeres en edad de trabajar, está buscando trabajo, mientras que para los hombres el indicador alcanza un 75%. La proporción de mujeres desempleadas fue de 15,3%, mientras que los hombres registraron un 9,6%.
3. **Educación.** Según datos de 2014 el departamento tiene una alta cobertura bruta en educación preescolar, básica primaria y básica secundaria; las dos primeras por encima de 100% y, la secundaria, con cobertura útil de 96,13%. Sin embargo, al hacer una aproximación a las razones que explican estas altas coberturas, se identifica que la variable niños en cada rango de edad, tiene como fuente las proyecciones poblacionales de DANE con base en Censo 2005, donde no se reflejan las realidades del territorio en el tema de migraciones por desplazamiento con origen en el conflicto y/o en deportación o retorno fronterizo. En cuanto a la cobertura neta de educación básica, las cifras se acercan más a la realidad departamental, porque se excluyen la extra-edad y la repitencia. Así, para 2014 el porcentaje de cobertura neta en educación básica fue de 90%. Las coberturas educativas en media vocacional registran criticidades en Hacarí, San Calixto y Teorama. Los jóvenes no alcanzan a terminar ciclo académico, principalmente, porque las instituciones educativas rurales sólo cuentan con currículos y docentes hasta quinto y noveno grado.

¹⁰ Necesidades Básicas Insatisfechas, Junio 2012 a partir de información Censo 2005.

¹¹ Área Metropolitana de Cúcuta, conformada por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia

- 4. Salud.** En los últimos 6 años se han incrementado los niveles de cobertura en salud en cerca del 8,5%. Según datos del Ministerio de Salud, a febrero de 2016, el 98,9% del total de la población se encontraba afiliada a algún régimen de salud (67% al sistema subsidiado, 31% al sistema contributivo y 2% a regímenes excepcionales). La alta afiliación al régimen subsidiado refleja la limitada oferta de oportunidades laborales en el territorio y la alta situación de vulnerabilidad y pobreza de casi tres cuartas partes de los habitantes. La situación en municipios del Catatumbo como El Tarra y Convención refleja coberturas subsidiadas superiores al 100% de la población proyectada. La mortalidad infantil¹² ha venido disminuyendo en los últimos 10 años (de 15% en 2005, pasó a 12,8% en el año 2013), comportamiento similar a la variación nacional. Sin embargo, en la Región del Catatumbo persisten significativas disparidades territoriales y poblacionales que reflejan la falta de acceso en condiciones de equidad a servicios esenciales de salud, expresados en altas tasas de mortalidad infantil en municipios como San Calixto (28,76%), Hacarí (27,92%) y El Tarra (23,06%).
- 5. Vivienda y servicios públicos.** El déficit habitacional estimado por el DANE, con base en el censo de 2005, es de 10,3%, mientras que para los municipios que conforman la Región del Catatumbo, es de 50,45% del total de hogares. Además, de los 32.267 hogares que habitaban en zonas urbanas, el 24,45% presentaba déficit de vivienda, mientras que, de los 26.033 hogares rurales, el 83,93% estaba en déficit. El déficit cualitativo de vivienda es superior al cuantitativo. El 26,1% de las viviendas carecen de condiciones dignas de habitabilidad. En nueve de los once municipios que conforman la Región del Catatumbo, el déficit cualitativo era superior al 90% y en los dos restantes estaba entre 82% y 89%. En Teorama el servicio se presta una hora diaria tres días a la semana y, en municipios como Hacarí, Sardinata y Ocaña, tienen horarios específicos de acceso al servicio. En Norte de Santander existe un grado de riesgo medio frente a la calidad del agua¹³, pero en algunos municipios que tienen acceso al servicio de agua (como San Calixto, Sardinata y La Playa), el nivel de riesgo de consumo de agua no potable es alto.
- 6. Sostenibilidad.** La biodiversidad nortesantandereana está representada fundamentalmente en los parques naturales nacionales y regionales, que le otorgan al departamento un lugar privilegiado en ecosistemas productores de agua. Las áreas naturales protegidas tienen una extensión total de 501.673 ha¹⁴, distribuidas de la siguiente manera: Zona de Reserva Forestal (55,48%), Reservas Forestales Protectoras (2,25%) y áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (41,22%). Entre estos parques están el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí (158.125 ha); el Parque Nacional Natural El Tamá (48.000 has) y el Parque Natural Regional Sisavita (11.958 has), el cual es una zona de recarga y regulación de agua y hace parte del Complejo de Páramo de Santurbán. En el Municipio de La Playa de Belén se localiza el área natural regional Los Estoraques, considerada única en su tipo, con un área de 6 km².
- 7. Cultura política.** El Plebiscito sobre el Acuerdo de Paz marcó una dinámica territorial diferenciada: en el sur de la frontera del departamento, tuvo más fuerza el No. En el Catatumbo, región ampliamente afectada por el conflicto armado, la opción del Sí fue la ganadora. En el municipio de Ocaña, la Registraduría avaló la iniciativa ciudadana de revocatoria del mandato de la alcaldesa de Ocaña, liderada por el ex candidato a la Asamblea Departamental Dinael Rodríguez¹⁵, según la que en menos de dos meses debería definirse la fecha para nuevas elecciones en el municipio.
- 8. Concentración de la tierra y su vocación.** La concentración de la tierra se asocia al modelo de desarrollo socio-económico, promotor de monocultivos de caucho, palma, caña de azúcar y de la ganadería, así como la industria de la extracción, que estimula la compra masiva de tierras, incluso con la práctica de las ventas fraudulentas y mecanismos violentos e ilegales. Así, la tenencia y uso de la tierra es factor asociado al conflicto. Según el IGAC en Norte de Santander hay 2,1 millones de hectáreas, con un 6,5% (141.000 ha) de suelos cultivables. De estas, 35% están sobre-utilizadas, (761.000 ha en Sardinata, Abrego y El Carmen) y 5% subutilizadas (111.000 ha en Cúcuta, Tibú, La Esperanza). De los 40 municipios, 32 tienen potencial en su suelo. Hay 4.262¹⁶ solicitudes de restitución de tierras, 41% de las solicitudes (1755) corresponden a predios ubicados en Tibú. Existen 79 sentencias que han resuelto 111 solicitudes, de 519 que han sido presentadas a los jueces de restitución, lo cual indica un represamiento del 79% de las solicitudes¹⁷. La micro-focalización¹⁸ es una barrera de acceso, ya que los municipios donde se ha dado la mayor cantidad de despojo de tierras (Región del Catatumbo) no han sido priorizados por la presencia grupos armados no estatales.

¹² Muertes de niños y niñas menores de un año, se expresa en tasa por mil nacidos vivos y mide la probabilidad que tiene un niño recién nacido de morir antes de cumplir su primer año de vida.

¹³ Riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el incumplimiento de características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano.

¹⁴ Plan de Manejo Ambiental Parque Nacional del Catatumbo. Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales.

¹⁵ La Opinión (2016). Disponible en: <http://www.laopinion.com.co/politica/aprueban-proceso-revocatorio-en-ocana-130585#ATHS> 28/03/2017

¹⁶ UAERTD-Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Corte 01 marzo de 2017.

¹⁷ Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, CORPOREDDEH, en la presentación de su IV Informe de Derechos Humanos en 2016.

¹⁸ La microfocalización es un mecanismo de selección de casos para ser atendidos prioritariamente. Ésta es definida por instituciones que cuentan con la capacidad técnica y el conocimiento histórico del contexto de violencia del país. En este sentido el Decreto 4829 de 2011, en su artículo 4° establece que el gobierno nacional regulará una instancia de carácter operativo a nivel local para adelantar la microfocalización por municipios, veredas y corregimientos para la implementación gradual y progresiva del proceso de restitución de tierras.

3. CONTEXTO Y RETOS HUMANITARIOS

MENSAJES CLAVE

- El Equipo Local de Coordinación (ELC) ha identificado al Catatumbo, incluyendo la provincia de Ocaña, al Área Metropolitana de Cúcuta y la Zona de Frontera como áreas de preocupación humanitaria. Aunque las FARC-EP salieron del escenario de confrontación, se ha dado una reconfiguración territorial en la que otros grupos como el EPL y el ELN, han aumentado su participación en acciones bélicas con consecuencias para la población civil como desplazamientos masivos, homicidios selectivos, secuestros (28 personas en 2017¹⁹), amenazas a contratistas, personal médico, líderes y lideresas sociales, profesores, funcionarios públicos, población LGBTI, ciudadanos venezolanos, entre otros. Persisten las acciones contra infraestructura petrolera generando un impacto en el medio ambiente.
- En el área metropolitana de Cúcuta, zona de frontera y el municipio de Tibú se ha intensificado el accionar de los Grupos Armados Post-desmovilización (GAPD) especialmente el Clan del Golfo, los Rastrojos, y un nuevo grupo denominado Ejército paramilitar de Norte de Santander, con consecuencias humanitarias que, por las condiciones de seguridad, el bajo nivel de denuncias por parte de las víctimas y dificultades de acceso a la información, se encuentran invisibilizadas.
- El flujo de ciudadanos desde Venezuela continúa en aumento y en condiciones de subregistro. En Norte de Santander persiste el incremento de asentamientos humanos en los municipios fronterizos, con impedimentos para acceder a bienes y servicios de primera necesidad. Se destacan serias dificultades que enfrentan los ciudadanos/as venezolanos para regularizar su situación en Colombia, afectando el acceso a derechos, principalmente, el derecho a la educación en el caso de NNA. Los ciudadanos venezolanos se enfrentan a la falta de oportunidades laborales y de ingresos, que llevan a riesgos de protección y explotación, en particular, de mujeres y niñas frente a la explotación sexual.

CONTEXTO Y RETOS HUMANITARIOS

1. **Desplazamiento forzado.** En 2017, cerca de 1.171 personas en la Región del Catatumbo se han visto obligadas a desplazarse como consecuencia de acciones armadas, evidenciando la continuidad en la dinámica del desplazamiento. Se destaca que las personas desplazadas en lo corrido del año, representan el 60% de los desplazamientos registrados en el 2016. Se destaca una dinámica cada vez más inter - veredal este año en contraste con el 2016, como resultado de la mayor intensidad de la confrontación armada en zonas rurales, guardando similitud con la dinámica de 2015. En 2016 y 2017, Hacarí, Sardinata y Teorama, resultan ser los principales municipios afectados por este hecho victimizante. Cinco desplazamientos masivos registrados por OCHA en 2016, estuvieron asociados a acciones contra fuerza pública y combates producto de la reorganización del EPL en el territorio, registrándose un total de 1.544 víctimas²⁰ en el año, impactando a más de 449 mujeres y niñas, y generando necesidades en educación en emergencia, salud mental y protección.
2. **Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG).** Norte de Santander es el quinto departamento con mayor frecuencia de accidentes por MAP y MUSE a nivel nacional y hace parte de los cinco departamentos que concentran el 53% de los eventos por MAP y MUSE, reportados a nivel nacional²¹. De acuerdo con DAICMA, entre 1990 y el 31 de agosto de 2017, 233 civiles (28 mujeres y 205 hombres) y 572 miembros de la fuerza pública han sido víctimas de minas antipersonal. Los grupos armados no estatales usan estos artefactos explosivos para proteger los corredores estratégicos y cultivos ilícitos, para bloquear vías de acceso y caminos en veredas con el fin de obstaculizar las operaciones militares y limitar la movilidad de la población. El uso de estos explosivos ha repercutido en la seguridad alimentaria, educación, agua potable y otros servicios básicos. El desminado humanitario aún no se ha llevado a cabo y persisten barreras de acceso a los sistemas de salud para las víctimas.
3. **Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto armado.** Como consecuencia del conflicto armado, los NNA se encuentran expuestos a riesgos que incrementan su vulnerabilidad, como la contaminación por MAP/MUSE, el reclutamiento, el uso y vinculación por parte de los grupos armados, el desplazamiento forzado, el confinamiento y la explotación sexual. En 2016 por lo menos 21.937²² niños y niñas se vieron afectados por restricciones de acceso a la educación, servicios y a la movilidad en Norte de Santander, relacionados con el paro armado del ELN, y eventos MAP/MUSE/AEI. Se mantienen los ataques a instituciones educativas y amenazas a profesionales de la salud en el Catatumbo, afectando la prestación del servicio a NNA especialmente en Teorama, Hacarí y San Calixto. Se evidencian necesidades de educación en emergencia, salud mental y protección. Persisten vacíos de información asociados a las condiciones de seguridad y el temor de las comunidades para denunciar casos de reclutamiento de NNA y, en consecuencia, vacíos en la respuesta. Sin embargo, las acciones del ELC están dirigidas a fortalecer la respuesta enfocada a la educación en emergencia, uno de los factores principales de riesgo.

¹⁹ Monitoreo OCHA, Corte 01 octubre de 2017.

²⁰ Monitoreo OCHA, Corte 01 octubre de 2017.

²¹ DAICMA - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Frecuencia anual de eventos por departamento. Corte 1990-31 agosto de 2017.

²² Monitoreo OCHA, Corte 01 octubre de 2017.

- 4. Mujeres y Niñas ante la discriminación y violencia basada en género (VBG).** De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander, este departamento se ubica en el quinto lugar del país con casos de VBG²³. El Instituto Departamental de Salud, a noviembre de 2016, registró 1703 casos de VBG, de los cuales el abandono y negligencia (452 casos) y el abuso sexual (275 casos) resultaron ser los más elevados, concentrándose el 43% de los casos en el municipio de Cúcuta. En 2016 el Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) registró 39²⁴ homicidios de mujeres, 10 casos más que en 2015. La participación de actores del conflicto en casos de violencia sexual contra mujeres disminuyó 2,7 puntos porcentuales entre 2004 y 2015²⁵. Entre 2004 y 2015, las parejas, parientes o conocidos fueron los mayores responsables como perpetradores en casos de violencia sexual.
- 5. Comunidades étnicas.** La Comunidad indígena Motilón Barí, que se encuentra ubicada al norte del departamento, es la más afectada por el impacto del conflicto, a través del confinamiento, la presencia de MAP/MUSE, el reclutamiento forzado de niños y niñas, la violencia sexual contra mujeres y niñas, y la inseguridad alimentaria. Desde julio de 2013 esta comunidad denunció violaciones permanentes de sus derechos fundamentales e infracciones al DIH, declarándose en crisis humanitaria²⁶. El Pueblo Uwa, con presencia en el municipio de Toledo en Norte de Santander y en los departamentos de Boyacá y Arauca, mantiene un espacio de diálogo con el Gobierno nacional y Ecopetrol por las afectaciones a su territorio ancestral. En el caso de Norte de Santander, las afectaciones más notables se deben a la operación de la planta de gas de Gibraltar, propiedad de Ecopetrol. Como consecuencia de incumplimientos de acuerdos preexistentes, en junio de 2016, en el marco de la Minga Agraria Campesina, Étnica y Popular, el pueblo Uwa restringió el relevo de operadores de la planta durante varias semanas, hasta que se avanzara en los acuerdos pactados.
- 6. Confinamiento y Acceso Humanitario.** En 2017, se han registrado 8 eventos de restricción al acceso a bienes y servicios, afectando a cerca de 35.372²⁷ personas, debido a acciones bélicas y uso de artefactos explosivos principalmente. En 2016, OCHA registró 38 eventos de confinamiento²⁸ y restricciones a la movilidad, al acceso a bienes y servicios, en los que se vieron afectadas cerca de 41.095 personas²⁹, especialmente en el Catatumbo. Estas restricciones —por hostigamientos, bloqueos de vías, presencia de MAP/MUSE, ataques a infraestructura petrolera, infracciones a la misión médica— son producto de los combates entre la Fuerza Pública y grupos armados no estatales.
- 7. Desastres naturales.** En 2017, de acuerdo al monitoreo de OCHA, por lo menos 6.468³⁰ personas resultaron afectadas como consecuencia de deslizamientos e inundaciones, teniendo como principal amenaza las fuertes lluvias, que han hecho que se incremente el caudal de los ríos Pamplonita, Táchira y Zulia. Esto generó emergencias en los municipios de Pamplona, Puerto Santander, Tibú, Cúcuta, Villa del Rosario, El Zulia, Cácuta, Toledo y, también, en la Región del Catatumbo, donde la principal afectación son los deslizamientos que han incomunicado al casco urbano con zonas rurales. Se ha registrado afectación de viviendas en zonas de alto riesgo, pérdida de cultivos de pan coger y afectación en las vías limitando la movilidad de los pobladores. En el barrio Primero de Marzo del municipio San Calixto, 81 personas (21 familias) han sido afectadas por deslizamientos, que se registran desde la primera semana de abril de 2017. La situación de riesgo continúa por lo que parte de la población ha tenido que ser evacuada. Colapsaron 5 viviendas y por lo menos 20 se encuentran afectadas.
- 8. Frontera.** La frontera comprendida entre el departamento Norte de Santander (Colombia) y los Estados de Táchira y Zulia (Venezuela), ha entrado en una profunda crisis desde el cierre fronterizo el 19 de agosto de 2015, que afectó a 22.226 personas, deportadas/expulsadas o retornadas, las cuales fueron incluidas en el registro oficial. Durante el cierre y, después de la apertura de la frontera el pasado 13 de agosto de 2016, se evidenció un constante flujo migratorio, tanto por los puntos oficiales como por las trochas (cruces informales). Desde entonces, la situación fronteriza continúa evidenciando necesidades humanitarias y, en especial, de protección, particularmente, para mujeres gestantes, lactantes, NNA y personas enfermas. La Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias vienen realizando un seguimiento permanente a la dinámica fronteriza, evidenciando que persisten barreras para acceder a bienes y servicios de primera necesidad, así como el acceso a la educación y a la atención médica, debido a la falta de documentación, que permita regularizar la situación de venezolanos/as y colombianos/as. La presencia de población migrante en el departamento, especialmente venezolana, en condición de irregularidad (por la inflexibilidad de la ley migratoria en cuanto a requisitos y costos), favorece el subempleo, la explotación laboral, la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes y situaciones de explotación sexual y violencias, en particular, contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se destaca que, ante las condiciones de vulnerabilidad, en monitoreos que realiza el ELC, se ha evidenciado la llegada de ciudadanos/as venezolanos/as a la Región del Catatumbo, los mismos se han insertado en las economías ilegales, especialmente en la raspa de coca. Se destaca el incremento de la inseguridad en cercanías a los cruces formales, debido a los constantes enfrentamientos de GAPD y otros actores de zona fronteriza. Aumenta la solicitud de cupos de niños venezolanos en instituciones educativas de la frontera. Según la secretaria de educación departamental, alrededor de 1.800 niños y niñas venezolanos actualmente están estudiando en el departamento y requieren regularizar su situación en el país.

²³ Fundación Ideas para la Paz (2014). Norte de Santander Capacidades Locales para la Paz http://www.ideaspaz.org/especiales/capacidades-locales-para-la-paz/descargas/FIP_CartillasRegiones_06NorteSantander.pdf

²⁴ Instituto Nacional de Medicina Legal Corte a 31 diciembre de 2016.

²⁵ Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF. Informe anual Forensis. 2015.

²⁶ ONIC –Organización nacional Indígena de Colombia. Solicitud de acción urgente por vulneración de los Derechos Humanos del Pueblo Motilón Barí. Julio 5 de 2013. Recuperado de: <http://www.onic.org.co/noticias/327-solicitud-de-accion-urgente-por-vulneracion-de-los-derechos-humanos-del-pueblo-motilon-bari>

²⁷ Monitoreo OCHA. Corte 01 octubre de 2017.

²⁸ Desde julio de 2013 OCHA estableció un marco para el monitoreo del confinamiento. Según este marco, una población se encuentra confinada cuando sufre limitaciones a su libre movilidad por un periodo igual o superior a una semana, y además tiene acceso limitado a tres bienes o servicios básicos, como: educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros. La información disponible no refleja la totalidad del fenómeno pues depende de reportes consolidados por OCHA y los Equipos Humanitarios Locales; de tal forma que puede haber vacíos de información en zonas con menos presencia de organizaciones internacionales.

²⁹ Monitoreo OCHA. Corte 01 octubre de 2017.

³⁰ Monitoreo OCHA. Corte 01 octubre de 2017.

RESPUESTA

1. FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN NORTE DE SANTANDER³¹

HUMANITARIO	AÑO	MONTO TOTAL ADJUDICADO			BENEFICIARIOS TOTALES	Sectores con mayor financiación
	CERF	Fondo Humanitario de Colombia	Otros Donantes	Total Financiamiento Humanitario		
	2016	-	USD 130.000	USD 5.211.028	50.372	1. Protección 2. Salud mental y Apoyo Psicosocial 3. EeE (Educación en Emergencia)
	2017	-	USD 0	USD 3.827.915	70.718	1. Protección 2. Salud mental y Apoyo Psicosocial 3. Salud

PAZ Y DESARROLLO	AÑO	MONTO TOTAL ADJUDICADO		BENEFICIARIOS TOTALES		Temas con mayor financiación	
	PAZ	DESARROLLO	PAZ	DESARROLLO	PAZ	DESARROLLO	
	2016	USD 2.926.152	USD 2.136.321	19.231	19.799	Derechos de las víctimas	Equidad y movilidad social
	2017	USD 4.117.960	USD 1.002.277	64.492	2.033	Derechos de las víctimas	Equidad y movilidad social

Nota: total entre paz desarrollo y humanitario no se deben sumar, dado que un proyecto puede caer entre ambos marcos.

2. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)

El ELC de Norte de Santander es uno de los más grandes de Colombia con 25 organizaciones activas: 10 agencias ONU y 15 ONG internacionales, organizaciones locales y observadores. Se destaca como prioridades del plan del trabajo del ELC, la coordinación para generar atención integral y complementaria, considerando las debilidades institucionales de respuesta, especialmente, en los sectores de agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición, y protección. Se promueve la interlocución con entes como la UARIV y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para facilitar la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos identificados en la respuesta.

Presencia operativa de equipo local de coordinación Norte de Santander

COORDINACIÓN

HUMANITARIO	ZONA ³²	Albergue	Agua, saneamiento e higiene	Seguridad alimentaria y nutrición	Salud	Protección	Educación	Recuperación temprana
		Área Metropolitana	-	-	-	OIM, HI	OIM, NRC, ACNUR, Tierra de Paz, SEPAS Florencia, CCCM, SEPAS Pasto, HI	NCR, OIM
	Catatumbo	-	HEKS-EPER	PMA	HI	OIM, NRC, ACNUR, Tierra de Paz, SEPAS Florencia, CCCM, SEPAS Pasto, HI	NCR	Caritas Alemania
	Otros	-	-	-	HI	OIM, NRC, ACNUR, Tierra de Paz, SEPAS Florencia, CCCM, SEPAS Pasto, HI	NCR, OIM	OIM
PAZ					DESARROLLO			
Área Metropolitana		PNUD, UNODC, OACNUDH, ONU Mujeres, UN-HABITAT			Área Metropolitana	OIM, FAO, PNUD, UN-HABITAT, ONU Mujeres, UNODC		
Catatumbo		PNUD, UNODC, OACNUDH, UNICEF			Catatumbo	OIM, PNUD, FAO		
Otros		PNUD, UNODC			Otros	OIM		

³¹ Fuente: SIDI 4W corte: 28 de septiembre de 2017.

³² Subregiones: Área Metropolitana: Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano y Villa del Rosario; Catatumbo: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú; Otros: Arboledas, Bochaleta, Bucarasica, Cácuta, Cáchira, Cucutilla, Chinácota, Chitagá, Durania, Gramatote, Herrán, La Esperanza, Labateca, Lourdes, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar de las Palmas, Santiago, Silos, Toledo y Villacaro.

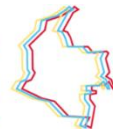
Elaborado por:



EQUIPO LOCAL DE
COORDINACIÓN

UMAIC

Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia



Con liderazgo de PNUD, OCHA, SNPS y ONU MUJERES.

"Este producto fue desarrollado con el apoyo financiero de la Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)"

Para mayor información sobre este producto, contacte a:
ELC Norte de Santander
Dirección: Avenida 4E # 6 – 61 Barrio Sayago. Cúcuta.
Teléfono: +57-7-5778669 ext. 130 - 131
Correo electrónico: nortedesantander@umaic.org